

Se anuncian nuevos movimientos del mundo proetarra y de los grupos bautizados como mediadores y verificadores internacionales, para forzarle la mano al Gobierno en su política antiterrorista. Ahora mismo tienen el proyecto de organizar para la semana que viene una *performance* en el Parlamento Europeo que vuelva a poner en valor la declaración de Ayete del pasado mes de octubre en la que varios representantes políticos internacionales pidieron a ETA que renunciara a la violencia, y a los gobiernos español y francés que se sentaran a negociar con la banda para acabar con el último «conflicto armado» en Europa.

Se trata, de nuevo, como ya sucedió durante la tregua de ETA anunciada bajo el Gobierno Zapatero, de internacionalizar la cuestión, algo para lo que más de un diputado europeo estará sin duda dispuesto. El martes veremos hasta dónde ha conseguido llegar la capacidad de persuasión de los radicales y, por contra, el poder de argumentación de los diputa-

Los sectores 'abertzales' preparan un acto en el Parlamento Europeo de apoyo a su estrategia

Los llamados mediadores internacionales presionan al Gobierno 'por tierra, mar y aire' para que les reciba

Los radicales se benefician electoralmente del pulso político que están manteniendo con Rajoy

dos constitucionalistas españoles.

El hecho es que estos grupos, los llamados mediadores y verificadores internacionales no han dejado de enviar mensajes al nuevo Gobierno del PP en el que garantizan que la banda terrorista no está realizando ningún movimiento que permita sospechar que va a romper su compromiso público de renunciar a los asesinatos. Y no sólo eso: según fuentes cercanas al propio Ejecutivo, están intentan-

do que el presidente Rajoy o, en su defecto, el ministro del Interior, les reciba para abordar el «escenario de la pacificación definitiva». Y lo están intentando, además, «por tierra, mar y aire». Buscan, con el apoyo cerrado de los *batasunos*, dos cosas. Una, que su papel y los planteamientos que defienden queden legitimados por el Gobierno. Y dos, dejar constancia pública de que los malos de antes son ahora los buenos porque desean dar pasos hacia la reconciliación y hablar con los representantes del poder político español para cerrar definitivamente el «conflicto». Y que los buenos de antes, es decir, el presidente y su equipo, son ahora los malos porque con su cerrazón impiden alcanzar una solución.

En definitiva, los mediadores y los verificadores están y actúan para conseguir que el Gobierno de España acabe negociando con la banda terrorista las condiciones para su disolución. Ésta es la apuesta y éste es el riesgo. Porque es verdad que todos los análisis de quienes tienen auténtica información sobre la situación de la banda dicen que es altamente improbable que vuelvan a cometer atentados. Pero también es verdad que ETA no se va a disolver de ninguna manera antes de que se celebren las elecciones autonómicas vascas en marzo del año que viene. Y mucho menos lo va a hacer gratis, es decir, sin haber negociado de tú a tú con el Estado español en términos que pudieran justificar políticamente ante los suyos sus 50 años de asesinatos.

De modo que el tiempo que nos espera es de una presión creciente sobre el Gobierno para que reciba a los mediadores, legitime sus posiciones –que son las de ETA– y dé pasos en una política penitenciaria más laxa y permisiva que acabe sacando a la mayor parte de los presos etarras a la calle. Ésa sí que sería una factura política que los terroristas se cobrarían gustosos para después anunciar que se disuelven.

Pero nada de eso va a suceder, y no hay ahora mismo ningún dato que indique lo contrario. Mariano Rajoy no va a recibir a los mediadores ni a los verificadores. Y tampoco les va a mandar, aseguran las mismas fuentes próximas al presidente, ningún recado. Ni a ellos ni a la banda. Es verdad que el presidente del PNV, **Iñigo Urkullu**, ha trasladado a Mariano Rajoy más de uno y más de dos mensajes procedentes del mundo cercano a la banda. Pero no se puede decir que haya actuado como correo porque el presidente ha escuchado pero no ha respondido. No ha enviado mensajes de vuelta. En su más puro estilo de comportamiento, Rajoy no ha dicho nada. Nada de nada.

Su silencio y su negativa, secundada rotundamente por su partido, a dar el menor pábulo a cualquier pretensión de los terroristas de adquirir nada parecido al estatus de interlocutor del Estado español, aunque sea por vía interpuesta significa que no sólo la posición



Urizar, Etxeberria, Garitano, Barrena y Zabaleta celebran los resultados de Amaiur el 20-N. / EFE

pública del Gobierno es la que todos conocemos sino que no se está desarrollando ningún tipo de diálogo informal por debajo de la mesa con la banda. Ni directa ni a través de intermediarios, aseguran las fuentes cercanas al presidente.

Hay que prever, por tanto, que cuanto más se acerque el momento de las elecciones más se presionará a Rajoy para que haga gestos hacia la «superación del conflicto». De no suceder así, se le acusará cada vez con mayor intensidad de inmovilista. Un escenario que, por otra parte, conviene, y mucho, al partido que se presente a las elecciones en nombre de la izquierda abertzale, comúnmente conocida por Batasuna. Todo lo que sea mantenerse ante la opinión pública vasca como abandonados de la pacificación les favorece electoralmente. Y no habría ya nada que pacificar si la banda se hubiera disuelto.

Así que de disolución, nada. Lo previsible es que asistamos a actuaciones como la que se prepara en el Parlamento Europeo o, incluso a algún gesto de ETA en forma de comunicado o de escenificación en favor de la reconciliación y del «todos debemos pedir perdón», que es lo que dijo ayer en *El Correo* el representante de Bildu, Martín Garitano, presidente de la Diputación General de Guipúzcoa.

Hay que reconocer, sin embargo, que en este pulso durísimo que el nuevo Ejecutivo

está librando contra la banda –primero que se disuelvan y luego ya veremos– y que va a durar hasta más allá de los comicios autonómicos, los beneficios políticos y electorales están cayendo del lado de los radicales.

No hay más que ver por encima los datos que periódicamente publica en su Euskobarómetro el equipo del profesor **Francisco Llera** para calibrar lo que está pasando. Lo que se anuncia para marzo de 2013 es una victoria ajustada del PNV que, dado el panorama, se apoyaría en los abertzales para gobernar. La idea de que pudiera pedir el respaldo de socialistas o populares está descartada: los nacionalistas nunca se atreverán a dejar a los *batasunos* en la oposición porque eso sería tanto como dejar a su disposición el flanco del nacionalismo radical y dejarles libres para que se les coman la merienda ideológica.

Por lo tanto, y con el agravante añadido de que la mayoría de los jóvenes vascos se inclina por apoyar las posiciones políticas de Batasuna y sus satélites, lo que se nos viene encima, emboscada detrás del ajuste, la escalada del paro y el cumplimiento de los objetivos de déficit, es una amenaza política de primer orden para nuestro país. Llega el independentismo político apoyado en una aplastante mayoría parlamentaria.

victoria.prego@elmundo.es